

La experiencia del desplazamiento forzado en Urabá y el oriente antioqueño (1998-2006)*

Por Ana María Jaramillo**

* Artículo recibido en octubre de 2007.

Artículo aprobado en noviembre 2007.

** Investigadora de la Corporación Región.

*“Aunque me causa mucha nostalgia recordar mi salida,
para empezar le doy gracias a Dios por tener la libertad”¹*

Introducción

El desplazamiento forzado de colombianos hacia el interior y el exterior del país continúa siendo una de las expresiones más relevantes de la crisis humanitaria que vive el país. Aunque el fenómeno del desplazamiento ha venido ganando mayor visibilidad², es poco lo que se ha avanzado en el reconocimiento de las particularidades del fenómeno en las regiones y localidades afectadas y de las variantes de la experiencia vivida tanto por la población desplazada internamente como por la que se ha visto impelida a cruzar las fronteras nacionales o se ha dirigido a países más lejanos en busca de refugio.

En un intento de avanzar en esta dirección, la Corporación Región ha venido desarrollando una investigación comparativa sobre migración forzada de colombianos en Colombia, Ecuador y Canadá³. En lo que respecta a Colombia,

¹ Entrevista a una mujer desplazada de Granada (Medellín, marzo de 2006).

² Cabe destacar el papel que ha ejercido la publicación de investigaciones pioneras, como la llevada a cabo en 1995 por la Conferencia Episcopal, que llamaba la atención sobre la gravedad de la situación del desplazamiento; la Ley 387 de 1997, que significó el reconocimiento explícito del desplazamiento forzado como un asunto de Estado; el Decreto 1165 de abril de 1997, que creó la Consejería Presidencial para Atención Integral a la Población Desplazada en Colombia; los fallos de la Corte Constitucional; la labor de vigilancia de organismos internacionales y de organizaciones de derechos humanos, y las acciones colectivas de la propia población desplazada en reclamo de sus derechos.

³ Este estudio es coordinado por las investigadoras Pilar Riaño y Marta Inés Villa. Participan Corporación Región, (Colombia), Escuela de Trabajo Social de la Familia, de la Universidad de la Colombia Británica, y Flacso (Ecuador), y es financiado por el Idre y Colciencias (Colombia).

nos hemos centrado en el estudio de tres localidades del departamento de Antioquia (Urabá, oriente antioqueño y Medellín). En el contexto nacional, Antioquia es el departamento que presenta los mayores índices de desplazamiento forzado, con un 16% del total de la población expulsada y un 14,3% de recepción de población⁴, fenómeno que afecta no solo a las personas que han tenido que movilizarse forzosamente, sino también a los territorios, pues el total de los municipios antioqueños se han convertido en lugares de expulsión, de recepción o de una combinación de ambos procesos (Gobernación de Antioquia, 2006). La mayor parte de tales municipios pertenece a Urabá y el oriente antioqueño.

La aproximación a los contextos específicos de expulsión y recepción y la experiencia vivida por esta población representan un reto conceptual y metodológico. A propósito de este artículo, es pertinente tener en cuenta los siguientes criterios:

En el plano conceptual partimos del entendimiento del desplazamiento y el refugio como categorías de la experiencia, lo que quiere decir que son construidas socialmente y por tanto están sujetas a cambios de acuerdo con contextos específicos y a los aprendizajes de individuos y comunidades afectados desde el momento de la expulsión hasta su inserción en las sociedades receptoras. Hay, pues, un intento de poner en relación la acción humana con el sistema, es decir, el ámbito de lo estructural —el entramado social, geopolítico e histórico con el de la agencia— la dimensión subjetiva y humana del desplazamiento desde la perspectiva de los actores (Riaño y Villa, 2007).

En lo metodológico, la realización de este proyecto ha requerido el diseño de una estrategia comparativa para establecer las diferencias y semejanzas en la experiencia vivida en los lugares de expulsión y en las sociedades receptoras

⁴ Según datos oficiales, entre 1995 y 2006 fueron desplazadas de este departamento 313.073 personas, cifra que lo convierte en el principal departamento expulsor del país; en el mismo lapso fue receptor de alrededor de 61.594 personas (Acción Social, 2006).

y la definición de unos ejes de análisis comunes, a saber: miedos-memoria histórica-representaciones sociales.

El miedo reviste importancia como eje analítico, dado el papel que este sentimiento —que nace de la percepción de una amenaza real o imaginaria (Delemau, 1989)— llega a adquirir no solo como una experiencia individual sino como un elemento regulador de órdenes sociales específicos (Reguillo, 2000 y Lechner, 1996), cosa que incide en los comportamientos individuales y colectivos de poblaciones que viven en contextos de miedo y terror⁵.

En este artículo se dará cuenta de algunos resultados que arroja el trabajo de campo realizado (talleres de memoria, entrevistas, observación de campo, grupos de discusión) con población desplazada de Urabá y el oriente antioqueño, lo cual proporciona pistas para el análisis de las relaciones entre los contextos de expulsión y recepción con los miedos experimentados por la población, así como la experiencia organizativa, como un indicador de la capacidad de respuesta colectiva orientada al reclamo de sus derechos.

La experiencia del desplazamiento en Urabá

Urabá es una de las regiones del país en donde los procesos de desplazamiento forzado han sido más intensos y continuos desde 1985, cuando se produce el primer ciclo de desplazamiento en el norte de esa región, hasta el momento presente. Aunque a partir de 2003 se evidencia una disminución de las cifras de población desplazada, ello no representa un cese del fenómeno. Según las cifras de Acción Social, entre 1995 y septiembre de 2006 han sido

⁵ Hay que tener en cuenta la valoración que la Corte Constitucional hizo del papel del miedo como factor promotor del desplazamiento, al considerar que este fenómeno no debe ser entendido como una forma de respuesta originada apenas en una acción específica, sino también en razón “del riesgo que observan para su vida e integridad personal, peligro que se deriva de las amenazas directas que les son formuladas o de la percepción que desarrollan por los múltiples actos de violencia que tienen lugar en sus sitios de residencia” (Corte Constitucional, Sentencia SU 1150).

desterradas de la zona 62.186 personas, lo que equivale a un 20% del total de la población departamental desplazada (Gobernación de Antioquia, 2006).

Los procesos de desplazamiento individual y colectivo aparecen directamente asociados a la importancia estratégica de esta región en el contexto del conflicto armado interno y sus dinámicas específicas, que han sido analizadas en detalle por varios autores (García, 1999; Ortiz, 1999; González, 2002 y Suárez, 2007).

Urabá goza de una ubicación geoestratégica privilegiada, dada su condición de zona de frontera con Centroamérica y con el interior del país, lo cual ha favorecido la operación de economías legales (la industria del banano) e ilegales (narcotráfico y contrabando de armas). Forma parte del Chocó biogeográfico, uno de los pocos reductos de biodiversidad que quedan en el mundo, y se proyecta la construcción de obras de infraestructura (un nuevo puerto para facilitar la comunicación con el Pacífico y una vía alterna a Panamá por el Tapón del Darién).

Los cambios que a partir de los años ochenta se producen en el conflicto armado, con antecedentes históricos en esta región (Roldán, 2003), responden a la implementación de una estrategia de expansión de las guerrillas de las Farc y el EPL desde áreas de periferia hacia el eje bananero, donde se concentra la actividad económica (Apartadó-Turbo-Carepa-Chigorodó), así como a la feroz competencia que se desata entre estas agrupaciones por la hegemonía política y militar. A ello se suma la emergencia de disidencias en el seno de estas agrupaciones, a la conformación de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Aucu), al mando de Carlos Castaño, y al incremento en la acción represiva de la fuerza pública.

El nivel de antagonismo al cual se llega por parte de estas fuerzas va a tener una incidencia en la generalización del conflicto armado, en la polarización de fuerzas sociales y políticas y en la apelación a prácticas de violencia extrema (Suárez, 2007), que, como en el caso de las masacres, tienen como blanco a la población civil.

De manera sistemática, diversos grupos de población (campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas) se ven forzados a abandonar sus territorios ante las órdenes de desalojo, masacres, amenazas y asesinatos selectivos. En un primer momento estos desplazamientos se concentran en el norte de Urabá, luego se extienden al eje bananero, y posteriormente al eje Mutatá-Dabeiba, Murindó, Vigía del Fuerte y los territorios aledaños que forman parte del medio y bajo Atrato. A partir del año 2003 se han producido desplazamientos en municipios aledaños a Urabá (Ituango, Peque) que revisten una importancia estratégica por ser puerta de entrada a Urabá y corredores para el transporte de armas y de coca, cuyo cultivo se expande en estos territorios y hacia la selva chocoana.

Los motivos del desplazamiento

Un elemento común en los relatos de los grupos de población con los cuales entablamos relación⁶ es el establecimiento de una diferencia entre un periodo de relativa tranquilidad (presencia de la guerrilla y en algunas ocasiones del Ejército) y la llegada del “conflicto armado de verdad”, asociado a la disputa entre los que se denominan “grupos al margen de la ley” para apoderarse de las tierras y los recursos naturales de la región. Así es como se explica la razón por la cual tales recursos se convierten en el blanco de las acciones de tales agrupaciones.

La decisión de desplazarse se encuentra asociada a situaciones tales como:

- El asentamiento en *lugares marcados*, es decir, “zonas de pura guerrilla”, donde era frecuente la llegada de hombres armados a cualquier hora, unas veces lista en mano y otras a la caza de todo el que veían por ahí.

⁶ La población de Urabá con la que se estableció relación presenta las siguientes características: su desplazamiento se produjo entre los años 1997 y 2002; proviene de localidades que son epicentro de los desplazamientos en la región: Apartadó, Chigorodó, Turbo, Mutatá, Riosucio, Carepa y San Pedro de Urabá; en su mayoría son personas adultas, entre los 40 y 50 años; es sobresaliente la presencia de viudas; lo predominante es una combinación entre desplazamientos individuales y masivos (Riosucio, Saiza).

A quienes no mataban ahí mismo se los iban llevando y no se volvía a tener noticia de ellos. De nada valieron las súplicas que las mujeres participantes en los talleres hicieron ante los armados para que no les quitaran la vida.

- El tránsito por caminos o puentes donde sobrevivir era una cuestión de suerte. Como recuerda una mujer indígena, *“el solo hecho de pensar que había que pasar este puente entre Mutatá y Pavarandó era el pánico más inmenso”, porque “cuando uno venía acá encontraba la fila de los carros y la gente ahí, mirando a ver a quién señalaban para poderlo bajar, descabezarlo y tirarlo al río. El Ejército se apostaba en un lado y los paracos en otro, no había escapatoria. ¡Y ay del que se atreviera a buscar a nadie!”*
- El temor de convertirse en la próxima víctima, al ver cómo todos los días asesinaban a personas que “no debían nada” pero que fueron sacadas de las casas, bajadas de los buses, masacradas en veredas cercanas. Sus cuerpos permanecían a la vista de todos, no se podía contrariar las órdenes de los armados: era la muerte haciendo presencia en todas partes.
- Las amenazas para que desalojaran sus tierras. Por mucho tiempo los campesinos vivieron tranquilamente cultivando el plátano, la yuca y el maíz, hasta el día en que “algunos” se interesaron por quedarse con lo suyo. A causa de las presiones, se afirma, *“no hubo más remedio que vender; nosotros no podíamos tener esa parcela y nosotros con ese miedo tuvimos que vender eso por lo que fuera, salir de ella”*.
- Ser señalado como integrante o colaborador de la guerrilla por parte los vecinos o conocidos, de quienes se temía que se hubieran convertido en informantes de cualquiera de los grupos armados, por los chismes y las envidias. Ya no era posible, como antes, sentirse tranquilo en el barrio ni dentro de la casa, *“siempre por el temor de que otros lo estuvieran escuchando”*. Una muestra del nivel de desconfianza a que se

llegó es la clasificación que un hombre desplazado de Chigorodó hacía entre los “oídos” (personas con mucha información, consideradas por la gente como potenciales informantes) “sapos” (informantes) y “lambones” (“*personas que andan atrás y se desconfía que también se pongan al servicio de algún grupo*”).

Había imposibilidad de ser neutrales, porque, como explica un hombre perteneciente a una comunidad afrocolombiana,

“Si hay una persona que esté en una vereda, por decir algo, y llegó la guerrilla y le pidió un servicio, la persona así sea o quiera ser neutral si no se lo hace de pronto pueden terminar la vida de él, si llegan los paramilitares también le sucede lo mismo, si llega el Ejército le puede suceder lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando esa persona no le sirve a cualquier actor armado es porque está confabulado con el otro.” (Taller de memoria con personas desplazadas, realizado en Urabá en abril del 2006).

Con todo, el desplazamiento es una decisión, salvo en casos en donde hay amenaza inminente; ocurre buen tiempo después de permanecer en los epicentros del conflicto, expuestos a las violencias ejercidas por todos los grupos. Se trata de una decisión difícil de asumir, por tener que dejarlo todo, pero la persona considera que llega el momento en que no queda otra opción posible.

En las narraciones sobre el desplazamiento individual se pone de relieve el papel que tienen las mujeres en la planeación de la salida, de tal manera que todo parecería algo natural, sin que nadie llegara a pensar que se iban del todo “porque debían algo”. En el mejor de los casos se lleva algún dinero y una “muda de ropa”⁷. A pesar del gran esfuerzo que se hace por no dejarse dominar por el miedo, solo cuando las personas logran subir al primer bus que pasa se experimenta una sensación de alivio, aunque se permanece en gran tensión

⁷ Uno de los elementos más importantes y del que menos información se tiene es el relacionado con las pérdidas ocasionadas por el desplazamiento forzado (bienes materiales e inmateriales), un asunto central a la hora de pensar en procesos de reparación.

porque se sabe que en cualquier momento los armados pueden montar un retén, “bajar a toda la gente y matar al que quieran”. Solo “la fe en Dios” y la “tranquilidad de conciencia de no haberse metido con nadie” ni estar “quemados”, manifiestan, les permitió salir con vida y arribar a un sitio, muchas veces definido sobre la marcha, para ponerse a salvo.

En los desplazamientos masivos la situación se torna más caótica. Como lo recuerdan varias personas que participaron en el éxodo de Riosucio, ocurrido en 1996, en momentos de tanta confusión no había forma de pensar en salvar nada, sino buscar a sus hijos y salir “en manada”, tratando de acertar en la elección del camino más seguro y llegar a alguna cabecera municipal en busca de refugio. Sin embargo, al arribar a Pavarandó se encontraron con un ambiente hostil auspiciado por las autoridades locales y el Ejército, que los miraban como guerrilleros. En los establecimientos que se disponen como albergues (coliseos o centros educativos) se vivían momentos de zozobra, debido a la mala atención, la vigilancia que se ejercía sobre los desplazados y las presiones para que retornaran a los lugares de donde habían sido expulsados, *“sabiendo que los paramilitares seguían asesinando y obligando a salir a la gente”*.

Tanto en los desplazamientos individuales como en los éxodos la familia procura salir unida, la pareja con los hijos, o las viudas. Esa es la experiencia predominante entre la población con la cual nos relacionamos. Cuando se desplaza la familia completa, ello representa una ventaja para su sobrevivencia en los lugares de recepción, por la posibilidad de que los dos padres y alguno de los hijos puedan conseguir trabajo remunerado.

Los lugares de recepción

La elección del sitio de llegada depende de la localización de familiares o vecinos que residan en cabeceras municipales. La población desplazada de Urabá se concentra en barrios de invasión localizados en la periferia de Turbo, Apartadó, Carepa y Mutatá (PIU Apartadó, 2006). Allí conviven campesinos, indígenas y afrocolombianos procedentes del Urabá antioqueño, Córdoba y

Chocó. Aunque se llega allí con “la esperanza de que las cosas estuvieran mejor”, lo que constatan quienes arriban entre los años 1997 y 1999 es un ambiente de zozobra igual o peor del anterior debido a los enfrentamientos entre la guerrilla y los “paras”. Los controles establecidos por estos últimos sobre la población hacían muy difícil vivir allí. *“La gente de un barrio no podía pasar a otro porque la mataban. A las seis de la tarde ya no se encontraba un alma en la calle, porque al que encontraran ya no respondían por él”*. Aunque esta situación empezó a cambiar desde el año 2003, *“porque no se volvieron a presentar asesinatos y enfrentamientos”*, con los desmovilizados de las autodefensas⁸, ahora las cosas han vuelto a empeorar, pues, como anotan varias personas, *“se sabe que continúan armados; un día son una cosa y en la noche son otra”*. Además, no se simpatiza con la propuesta del Gobierno de mezclarlos con ellos, sabiendo que son diferentes. Habría que agregar que el sentimiento de inseguridad se ha acrecentado entre la población desplazada que habita uno de los barrios de invasión de Mutatá, a causa de la conducta del Ejército, *“que no ha podido cambiar su actitud hostil hacia los desplazados al seguir considerándonos colaboradores de la guerrilla”*. En las frecuentes “batidas” (redadas) siguen perjudicando a las personas “que nada tienen que ver”.

¿Acaso las personas que se desplazan hacia Medellín se han sentido más seguras?

Medellín es el principal lugar de recepción de población desplazada proveniente de Urabá. Eso ocurre desde 1992 y se agudiza entre 1996 y 1998. Aunque a partir del año 2000 se presenta una disminución, el 11% de las personas que continúan llegando a Medellín proceden de Urabá, principalmente de Apartadó (Personería, 2006).

Los lugares de destino son las zonas clasificadas como de alto riesgo (por su ubicación en terrenos geológicamente inestables y por lo tanto considerados como no aptos para residir). Se trata de predios localizados en la periferia de

⁸ A partir del año 2004 empieza la desmovilización de los grupos de autodefensa que venían operando en Urabá y en territorios aledaños: el Bloque Bananero, el Bloque Élder Cárdenas y el Bloque Héroes de Tolová.

la ciudad, entre los cuales la zona nororiental constituye el principal polo de atracción y da continuidad a la tradición de lugar de refugio de migrantes y perseguidos por la violencia política y de pobladores urbanos destechados. Durante los primeros años de la estadia –como lo recuerdan desplazados que habitan el asentamiento El Pinal– les tocó vivir en medio de los enfrentamientos entre guerrillas y “paras” y de operativos del Ejército en busca de supuestos auxiliares de la insurgencia. Pero con la población desplazada que permanece en Urabá coincidimos en la apreciación de que, a partir de 2003, la situación ha mejorado, aunque se aprecia que los grupos de autodefensas que ejercen un control territorial *“no hacen nada para controlar el expendio y consumo de drogas y amenazan a los líderes que no están de acuerdo con ellos”*.

La estancia en los lugares de recepción, ya sea en Urabá o en Medellín, los enfrenta a situaciones en las cuales el miedo continúa teniendo fuerte incidencia en sus actuaciones. Así lo muestran el temor a su visibilización como desplazados y su actitud frente al retorno.

Las informaciones que durante su primer periodo de estancia les suministran familiares o vecinos sobre la necesidad de dar declaración como desplazados para poder ser incluidos en el sistema único de registro de población desplazada (SUR) los sitúa en la disyuntiva de hacerse visibles ante la autoridad o mantenerse en el anonimato. Pese al temor de ser ubicados y perseguidos por los actores armados, se disponen a hacerlo con la expectativa de obtener ayuda material de Acción Social. Sin embargo, los criterios establecidos por esta entidad para la aceptación o el rechazo de estas declaraciones han tornado más angustiosa la situación de aquellas personas que han sido rechazadas *“dizque por el mero hecho de que pasó el tiempo”* o porque no se les creyó su versión acerca de los motivos del desplazamiento⁹.

⁹ Como ha señalado la Corte Constitucional, el desplazamiento, por ser una situación de hecho, “no necesita como requisito indispensable para adquirir tal condición de desplazado el ser declarado por ninguna entidad ni pública ni privada para configurarse”. Con ello se deja sin piso el Decreto 2569, que reglamenta el procedimiento según el cual a las personas desplazadas se les permite acceder a los programas de gobierno solo si son incluidas en el Sistema Único de Registro (SUR), lo cual pasa por la valoración que el funcionario haga sobre la veracidad o la coherencia o incoherencia de su declaración.

Además, el tener que calificarse a sí mismos como desplazados produce un malestar: *“No es que seamos, sino que nos desplazan contra nuestra voluntad”*; *“Yo pienso que nunca quise ser desplazado”*; *“Nunca pensé yo que iba a ser desplazado, porque el verdadero desplazamiento es un horror, es algo que no es para nadie ni para ningún ser humano”*, son expresiones que dan cuenta de la resistencia a esta clasificación.

En la posibilidad de hacerse visibles se constata la importancia de las percepciones que la población desplazada construye frente a la sociedad receptora. Un indicador de eso es la experiencia adquirida en los lugares de recepción de Urabá y la ciudad de Medellín. En Mutatá, por ejemplo, se hace hincapié en la actitud de rechazo de autoridades locales y personas que *“los siguen viendo como guerrilleros, por el mero hecho de provenir de veredas que estuvieron bajo su control”* y por el expediente de culpabilizarlos de los hechos de delincuencia que se presentan en el lugar: *“Se ha vuelto costumbre decir que la población desplazada es la que hace todo lo malo, los que roban, las prostitutas, los que fuman marihuana, los que violan”*.

En Medellín, la discriminación se ha hecho sentir en la negativa a darles trabajo: *“Por el mero hecho de decir que se viene de Urabá ha sido motivo para no darnos trabajo, porque se cree que somos guerrilleros”*. Incluso algunas instituciones, según afirman, les han recomendado *“que no digamos que somos desplazados y menos de Urabá”*. Además, el color de la piel y las costumbres son percibidos como un elemento que los aísla. Tal es la experiencia de un padre de familia desplazado junto con su hija:

“Con la niña también hubo problemas en la escuela. Se mantenían peleando con ella porque era la morena del salón. Entonces le tocó afrontar ese problema, ella para adaptarse y los niños para acogerla a ella. La forma de hablar diferente, la forma de vestir diferente, el estudio es diferente, la forma de vivir es diferente, la comida es diferente, todo es diferente. Entonces acaba como con la forma de vida de uno. A la niña en este momento la está tratando una sicóloga porque inclusive lleva tres primeros y no se ha podido adaptar con esta situación que hemos vivido”. (Entrevista con hombre desplazado de Urabá. Medellín, mayo de 2006).

El retorno

Entre los desplazados que residen en Urabá el común denominador es una negativa a retornar, debido a la presencia de los actores armados, y por consiguiente el riesgo de verse nuevamente desplazados. Aunque se reconoce que la fuerza pública ha hecho mayor presencia en la región, lo hacen por algún tiempo y “siguen viendo con malos ojos a la población”.

Pero también hay quienes manifiestan que el hambre y la poca atención que les han brindado los han llevado a tomar la decisión de volver, aun con el riesgo de ser asesinados. Se trata de retornos de hecho hacia algunas veredas del eje bananero y que empiezan a ser objeto de interés del Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada, en Apartadó.

Entre la población con la cual nos relacionamos se cuentan dirigentes impulsores de la experiencia de Saiza, un corregimiento perteneciente al Departamento de Córdoba pero articulado a la dinámica de Urabá, con participación de la comunidad desplazada y con una labor de acompañamiento por parte de entidades internacionales y Acción Social. Si bien se ha logrado garantizar el retorno de buena parte de sus habitantes, se albergan temores ante la posibilidad de nuevos desplazamientos, debido a los operativos del Ejército contra la guerrilla y a las presiones ejercidas por unos y otros para que los reinsertados colaboren con ellos. Los aprendizajes logrados acerca de cómo desenvolverse en medio del conflicto, como lo manifiesta uno de los líderes de este proceso, han facilitado a la población el acto de ponerse de acuerdo sobre la actitud a asumir frente a los grupos armados: *“Tratar con ellos cuando sea necesario pero sin compromiso. Si alguien se topó con el Ejército, hablar con el Ejército; si se encontró con la guerrilla, hablar con la guerrilla. Esto es lo que se necesita ahora para poder continuar con el retorno”*.

Los procesos organizativos

En Urabá, una región que cuenta con una importante tradición de organización y movilización social, se han logrado los mayores avances en la con-

formación de comités de población desplazada en los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó, Carepa y Mutatá. Allí se eligen los representantes a una instancia de coordinación, el Comité Regional de Organizaciones de Población Desplazada (Cordeu)¹⁰.

Para los dirigentes de Cordeu es motivo de orgullo ser representantes de la población desplazada. Acción Social, la Defensoría y la Personería los reconocen como interlocutores y como personas que posen una representatividad regional, departamental y nacional como resultado de su participación en la Mesa Nacional de Población Desplazada, un escenario en el cual adoptan una postura de autonomía frente a los intentos de manipulación del gobierno de Uribe y de los grupos armados. Así explican su autodefinición como independientes.

Este intento de constituirse en un actor social y político, dentro de un contexto en buena medida determinado por el riesgo de un retorno a la guerra que se vivió en los años noventa, pone de relieve la capacidad de resistencia de esta población, que apela a una estrategia de visibilización y reclamo de sus derechos con una modalidad diferente a la de las “comunidades de paz” que operan en Urabá.

Experiencia del desplazamiento en el oriente antioqueño

Desde finales de 1990, el oriente de Antioquia toma el relevo de Urabá como epicentro del conflicto armado y del desplazamiento forzado. Entre 1995 y septiembre de 2006 fueron desplazadas 107.317 personas, lo que equivale al 35% de la población antioqueña desplazada (Gobernación de Antioquia, 2006). Desde el año 2004, y aunque la magnitud del fenómeno ha dismi-

¹⁰ En este proceso organizativo ha sido fundamental la labor de acompañamiento de Opción Legal (operadora de Acnur).

nuido, se continúa presentando la cifra más alta en población expulsada en el departamento.

El oriente, a diferencia de Urabá, como analiza García (2004), es una de las regiones más integradas a la nación, a causa del papel que desempeñó en la configuración histórica de Antioquia, a su cercanía de Medellín, segunda ciudad del país, y a una mayor presencia del Estado, especialmente en la zona del altiplano. Sin embargo, también se ha visto afectada por el conflicto armado que soporta el país.

Acorde con su estrategia de expansión, las guerrillas de las Farc y el ELN, presentes en la región desde los años setenta, privilegian zonas de importancia estratégica, como la de embalses (Granada, San Carlos, El Peñol, Guatapé, San Rafael), la autopista Medellín-Bogotá y los accesos a la región del páramo, donde se observa un aumento de las áreas de cultivo de coca y amapola. Esta ofensiva, intensificada desde mediados de los años noventa, se traduce en un incremento de los secuestros, el cobro de “vacunas” a empresas localizadas en el área y los atentados contra torres de energía eléctrica. En respuesta a esas prácticas se realizan frecuentes las operaciones militares y las autodefensas de Ramón Isaza y las que estuvieron al mando de Carlos Castaño, empiezan a replicar el modelo de guerra contrainsurgente puesto en práctica en Urabá.

La agudización del conflicto armado repercute de manera directa en los desplazamientos de población. Entre 1998 y 2004, el periodo más intenso del desplazamiento, grupos de población provenientes de veredas y corregimientos pertenecientes a la zona de embalses, bosques y páramos se dirigieron hacia las cabeceras municipales y hacia Medellín. Aunque el desplazamiento “gota a gota” es la modalidad predominante, de manera periódica se han producido éxodos de población, especialmente en las zonas del páramo y de bosques.

Los motivos del desplazamiento

En la población con la cual establecemos relación¹¹ el miedo es considerado en relación con situaciones en las que la presencia del peligro se torna evidente:

- La obligación de convertirse en colaboradores, debido a las presiones ejercidas por la guerrilla para el transporte de armas y víveres, para refugiarse en sus casas, informar sobre la presencia de personas extrañas y de los movimientos de otros grupos armados, algo bien difícil de lograr porque a medida que las cosas se complicaban no se podía distinguir “quién era quién”. Esto además transforma abruptamente la imagen que se tenía de una guerrilla que se mantenía en tránsito, sin meterse con la gente.
- El reclutamiento. El desplazamiento es asumido por las familias como la única forma de evitar que sus hijos sean reclutados por cualquiera de los grupos armados o que las jóvenes sean amenazadas o asesinadas por establecer relación afectiva con los armados, en particular con los soldados, que “se dedican a enamorarlas y luego las dejan embarazadas”.
- El riesgo de morir en medio del fuego cruzado, por pisar una mina o por el estallido de carros bombas que dejaron en ruinas a varios pueblos, lo cual, según testimonio de una mujer desplazada de Cocorná, *“llevó a que muchas personas tuvieran que cerrar sus negocios y se marcharan a la ciudad y a que sus municipios fueran estigmatizados como violentos y no volvieran a contar con la presencia de visitantes”*¹².

¹¹ La población con la cual nos relacionamos presenta las siguientes características: su desplazamiento se produjo entre los años 1999 y 2004; provienen de áreas rurales pertenecientes a los municipios más afectados por bloqueos de vías (Autopista Medellín-Bogotá), tomas guerrilleras, masacres y asesinatos selectivos; en su mayoría son personas adultas, entre los 40 y 50 años; es sobresaliente la presencia de viudas; predomina el desplazamiento individual y la condición de campesinos pequeños propietarios.

¹² Entre los episodios más recordados están las tomas guerrilleras. Es el caso de los municipios de San Francisco (1998, 2002), Cocorná (1998) Nariño, y San Luis (2001) y el estallido en Granada de un carro-bomba que tenía como objetivo militar el Comando de la Policía Municipal.

- Los “bloqueos”¹³ o confinamientos. Es característica la expresión de un sentimiento de angustia por no poder salir a trabajar y visitar a los familiares. Pero cuando “las cosas se calmaban” (momentos de tregua que en varias ocasiones fueron resultado de una labor de mediación de la Iglesia Católica y el movimiento de alcaldes del oriente) se revela que *“la gente se iba saliendo en busca de refugio a la cabecera. Algunos se volvían para sus tierras pero otros decidieron no regresar”*.
- Por vivir en los terrenos aledaños a la autopista Medellín-Bogotá se convirtieron en blanco de las acciones de represalia, sobre todo en el momento en que se producen secuestros e incendios de vehículos. Se vivía un “estado de alerta permanente” para tratar de reaccionar a tiempo, “corriéndonos un poco hacia adentro”, pero esto no fue suficiente para evitar que llegaran a donde fuera, “para sacar a la gente de las casas y asesinarla ahí mismo”. En otras ocasiones era la guerrilla quien ejercía la venganza como de castigo a la población por haberse “volteado”.

Como en Urabá, la decisión de partir no se produce en el primer momento. Una vez más son las mujeres las que toman la iniciativa de organizar la salida e impedir así que sus hijos sean reclutados. A varias de ellas esa determinación les acarrió la separación de sus esposos, cuando se negaban a abandonar el lugar en donde siempre habían vivido. En contraste con Urabá, se hace mención a algunas pertenencias que se lograron salvar. El poder disponer de un fogón, unas ollas, una máquina de coser se convierte en una ayuda para su sobrevivencia en los lugares de recepción.

En los desplazamientos masivos a consecuencia de las órdenes de desalojo de actores armados o de los operativos del Ejército se experimenta una gran

¹³ El confinamiento se caracteriza por la presión que ejercen los grupos armados sobre las comunidades, cosa que vulnera el derecho a la libre movilización y limita la posibilidad del desplazamiento como una alternativa de protección de la vida y la integridad física, lo cual provoca una crisis humanitaria, especialmente en zonas rurales y cabeceras administrativas (Gobernación de Antioquia, 2006: 71).

zozobra, por no saber qué rumbo tomar ni qué hacer de ahí en adelante. Al llegar a las cabeceras, que para varios de ellos es una primera estación en el desplazamiento, encuentran el apoyo de las autoridades locales y entidades departamentales e internacionales que les brindan ayuda, así como la solidaridad de gentes del pueblo mediante la recolección de alimentos y frazadas.

Rionegro y Marinilla, los dos principales centros urbanos del oriente antioqueño, se convirtieron en los principales lugares de recepción de la población desplazada. Aunque, al igual que en Urabá, ella se asienta en la periferia urbana, aparece más dispersa y la primera etapa de su estadía en compañía de sus familiares es más prolongada.

No obstante la precariedad de sus condiciones de vida, experimentan una sensación de menor zozobra, porque las fuentes de amenaza no son tan evidentes como en los lugares de expulsión. Sin embargo, en los testimonios de las mujeres se ponen de presente las dificultades de sobreponerse a la soledad, la angustia, la depresión nerviosa y la aparición de enfermedades que demandan tratamientos costosos, a los cuales no tienen acceso.

En Medellín la población desplazada proveniente del oriente se refugia en barrios de la periferia que cuentan con una tradición como lugares de recepción de anteriores generaciones de emigrantes procedentes de esta región, como Popular 1 y 2, Villahermosa, Santo Domingo Savio y Moravia. También se encuentran familias que residen en asentamientos de población desplazada, lo que ha favorecido un encuentro con desplazados provenientes de otras regiones de Antioquia (Conferencia Episcopal, 2001).

Si bien el tránsito por la autopista Medellín-Bogotá facilita un arribo más rápido a las ciudades que en el caso de las personas procedentes de Urabá, no por ello entraña menos riesgos, ante la posibilidad de ser bajados de los buses en retenes instalados por la guerrilla, los “paras” y el Ejército. El haber podido llegar con vida a la terminal de transporte es valorado como un gran logro, que no es posible de explicar sin la ayuda de un Dios protector que consideran

que nunca los ha abandonado y en el que confían para que les ayude a salir adelante.

Entre los desplazados residentes en Rionegro y Marinilla, la valoración sobre las condiciones de seguridad es similar: *“Uno se acuesta tranquilo y se levanta tranquilo; usted en el campo cierra la puerta por la noche y usted no sabe si va a ver el día”*. Esto marca una diferencia con respecto a las personas desplazadas que viven en los asentamientos de Medellín y que se han visto afectadas por la acción de grupos armados y bandas delictivas. Ante el temor de un nuevo desplazamiento y como medida de prevención para que sus hijos no se vinculen a estos grupos, algunas familias desplazadas del oriente toman la decisión de retornar a sus tierras.

Aunque la apariencia física de la gentes desplazadas del oriente no constituye un factor de discriminación social, como ocurre con los desplazados de Urabá que residen en Medellín, en el oriente es similar el temor que experimentan para hacer visible su condición de desplazados y tramitar su inclusión en el Sistema Único de Registro (SUR). Ellos también manifiestan haber sido objeto de maltrato por parte de servidores públicos y gente que los han calificado de “perezosos”, que “esperan que todo se los den”. Sufren la humillación de ser percibidos como mendigos, una figura que para la población desplazada está asociada a la marginalidad y la pérdida de dignidad, a la renuncia a valerse por sí mismos.

Venciendo la angustiada vergüenza que produce el tener que pedir, la urgencia de obtener alimentos ha obligado a mujeres desplazadas de oriente, Urabá y otras regiones a convertirse en las protagonistas de una estrategia colectiva de sobrevivencia en Medellín: los llamados “recorridos” consistentes en la realización de largas caminatas para la recolección de alimentos en tiendas, plazas de mercado y carnicerías. En esta actividad, según explican varias mujeres, no participan los hombres, debido a los problemas que les causaba su presencia, por convertirse en el blanco de los insultos de la gente en la calle, “por estar pidiendo cuando deberían estar trabajando”.

La experiencia organizativa

En el oriente antioqueño, el proceso de organización de la población desplazada se concreta en la existencia de las asociaciones de desplazados de Rionegro (Asoder) y Marinilla (Asoderma). El papel de las mujeres, entre las que se cuentan dirigentes de juntas comunales y organizaciones sociales, ha sido fundamental en su constitución, aunque han tenido que enfrentar la resistencia de hombres que no aceptan su liderazgo y la desconfianza entre los mismos desplazados, todo lo cual dificulta los proyectos productivos colectivos de las asociaciones. Empero, la organización es reconocida como una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y para mostrar a la sociedad que “no queremos vivir como mendigos” y “que sí servimos para alguna cosa”.

Este proceso organizativo tiene a su favor los avances de otras experiencias de participación ciudadana y desarrollo alternativo, promovidas por alcaldías y por el Laboratorio de Paz de Oriente, un escenario de confluencia de la labor en pro de la convivencia y la solución política del conflicto armado impulsado por la Iglesia Católica (Diócesis de Sonsón-Rionegro), ONG, alcaldías e instituciones del Estado.

En Medellín, la población desplazada de algunos municipios del oriente ha contado con el apoyo de colonias (San Carlos), fundaciones (Granada, Tierra Viva) y cooperativas (Coogranada). Eso ha propiciado el mantenimiento de vínculos con los lugares de expulsión y la obtención de ayudas materiales, aunque tales acciones no han implicado una modificación de su disposición al retorno.

El miedo al retorno

Entre las personas desplazadas que viven en Rionegro, Marinilla, y Medellín hay consenso en el rechazo al retorno, por el temor de que se repitan los problemas que tuvieron que afrontar, pues para ellos es evidente que el conflicto armado aún no ha terminado, las guerrillas están ahí, aunque menos visibles, y los desmovilizados no les inspiran confianza. En su opinión, tales

individuos “*se pasean campantes después de haber matado a sus familiares*”. “*¿No le parece que es imposible convivir con estas personas? ¿Quién le garantiza a uno que no lo van a volver a sacar?*”, afirman varios hombres desplazados del oriente y residentes en Rionegro.

Esta decisión aparece mediada también por el temor de ser víctimas de las minas antipersonales, que no se sabe dónde están enterradas y que en el momento en que se las pise van a causar mucho daño. “*¿Y a mí quién me garantiza que si yo puedo volver a mi casa no pueda ser una casa-bomba o que en el jardín no estén sembradas las minas antipersonales?*”, reflexionan. Ciertamente el oriente ha sido una de las regiones colombianas más afectadas por esta horrenda práctica de guerra a la cual han apelado las guerrillas para neutralizar la ofensiva del Ejército y mantener su presencia en la región. La población más vulnerable es la que habita áreas rurales pertenecientes a los municipios de Granada, San Francisco, Cocorná, San Luis y Argelia (Gobernación de Antioquia, 2006).

Pero, al igual que en Urabá, ha habido grupos de población que han asumido el riesgo de retornar. Es lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, en los municipios de Granada y San Carlos. En ello ha incidido la iniciativa de autoridades locales y de Acción Social. Por su parte, algunas colonias se han ideado estrategias para motivar a los desplazados a volver a su terruño. Es el caso de la colonia de Cocorná, que ha promovido las fiestas del retorno “*para hacer posible el reencuentro entre las familias y un recorrido por las veredas de donde fueron expulsados para establecer en qué situación se encuentran las propiedades que tuvieron que abandonar*” (*El Colombiano*, 26 de julio de 2006, 1A).

Como lo revela una evaluación realizada por Ilsa (2007) sobre las experiencias de retorno en el municipio de San Carlos, para la población que ha regresado el principal obstáculo radica en las condiciones de seguridad. Aunque la fuerza pública ha tenido una mayor presencia, en las veredas mas alejadas de la cabecera, los grupos armados ejercen control. Por eso los retornados se resisten a instalarse allí de manera permanente y han optado por salir a trabajar en el campo durante el día y regresar a la cabecera en las horas de la noche.

La visibilización como víctimas, un nuevo reto

Al referirse a la posibilidad de reparación por parte del Estado en aplicación de la Ley de Justicia y Paz, tanto entre la población desplazada de Urabá como en la del oriente es común la apreciación de privilegiar la reparación material, pues, según ellos, las pérdidas de sus seres queridos son irreparables y se alberga desconfianza sobre el cumplimiento de esa ley y sobre la acción de la justicia frente a los responsables de su desplazamiento.

En esta mirada, como lo expresan algunos hombres, influye el miedo de convertirse en blanco de represalias por parte de los victimarios, como recuerdan algunos que aconteció con personas que fueron condenadas en la violencia de los años cincuenta y que luego regresaron a “ajustar cuentas”. La desconfianza se ha acrecentado con el conocimiento de las amenazas de que han sido objeto personas que han llenado los formularios que ha puesto en circulación la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) o que se han hecho presentes en las audiencias hechas a los victimarios.

Conclusiones

Los anteriores elementos de aproximación a la experiencia del desplazamiento, establecidos con base en los relatos de grupos de población desplazada de Urabá y el oriente antioqueño, ponen en evidencia la manera en que las particularidades de estas subregiones y las dinámicas del conflicto armado moldean las experiencias del desplazamiento, fenómeno que no se reduce al momento de la expulsión sino que se prolonga en el tiempo. En los lugares de recepción sus vidas transcurren en muchas ocasiones bajo la reedición de las experiencias de miedo y terror, asociadas a la presencia de los actores armados, pero también de manera especial, al carácter incluyente o excluyente de las políticas públicas de restablecimiento y de las representaciones sociales que se construyen colectivamente sobre el desplazado como una amenaza o como un ser inferior que debe ser ayudado pero nunca reconocido en su condición de ciudadano y de víctima.

Aunque, de acuerdo con las dimensiones que hemos considerado, tienen mayor peso las similitudes de la experiencia vivida por la población desplazada con la cual nos relacionamos en Urabá y el oriente antioqueño, la existencia de condiciones favorables a la inserción son más significativas en unos lugares que en otros. No tiene las mismas implicaciones vivir en zonas que continúan siendo epicentro del conflicto (Mutatá), que en la zona del altiplano, así como el hecho de poder contar o no con un mayor apoyo por parte las autoridades locales y de la misma sociedad receptora, como lo evidencia la situación de desprotección de la población desplazada de Urabá al momento de arribar a las cabeceras en busca de refugio, en lo cual es palpable la diferencia con lo que acontece en el oriente.

En las formas de respuesta que la población ha venido construyendo para afrontar el desplazamiento y garantizar su asentamiento en los lugares de recepción, si bien se aprecia el peso del temor como un factor que condiciona sus posibilidades de autonomía y el reclamo de sus derechos, también, al mismo tiempo, tal práctica se ha convertido en un factor potenciador de la organización y su constitución en un actor colectivo, sin lo cual no es posible lograr avances en el restablecimiento de sus derechos ni el reconocimiento de la experiencia vivida.

Estos resultados tienen elementos comunes con otras investigaciones realizadas con un enfoque similar, y son el punto de partida para una comparación con otras experiencias de colombianos desplazados y refugiados, lo que esperamos que nos permita una mejor aproximación a la especificidad de la experiencia vivida, poniendo de relieve lo que es común y que puede favorecer el establecimiento de formas de relación, la definición e implementación de políticas públicas que tengan en cuenta estas realidades y la unidad de acción para hacer valer los derechos de las víctimas de la violencia colombiana.

Bibliografía

Conferencia Episcopal, Sección de Movilidad Humana, 2001, *Desplazamiento forzado en Antioquia, 1985-1998*, Vol. 8, Bogotá.

Comité Municipal de Atención Integral a Población Desplazada por la Violencia-(Cmaipdv), 2006, “Plan Integral Único (PIU)”, Apartadó, en medio magnético.

Gobernación de Antioquia, Comité Departamental para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia en Antioquia, 2006, *Plan integral único de atención a la población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia en Antioquia* (PIU), Medellín.

Reguillo, Rossana, 2000, “Los laberintos del miedo”, en *Revista de Estudios Sociales*, número 5, Facultad de Ciencias Sociales, Uniandes, Bogotá.

Riaño, Pilar y Villa, Marta Inés, 2007, “Estrategia metodológica. Investigación comparativa sobre la migración forzada de colombianos en Colombia, Ecuador y Canadá”, ponencia presentada al Seminario sobre metodologías comparativas de investigación social, Flacso, Ecuador.

García, Clara Inés, 1996, *Urabá. Región, actores y conflicto*, Bogotá, Cerec.

-----, 2004, Los condicionantes de espacio-tiempo en la orientación de las respuestas civiles a la guerra en Colombia, en *Regiones*, número 2, Crece/Iner/Observatorio del Caribe Colombiano, Medellín.

González, Fernán, Bolívar, Ingrid, y Vázquez, Teófilo, 2002, *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción de Estado*, Bogotá, Cinep.

Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos (Ilsa), 2007, *Desplazamiento y retorno. Balance de una política*, Bogotá, Ilsa.

Lechner, Norbert, 1996, “Nuestros miedos”, conferencia presentada a la Asamblea General de la Flacso en Ciudad de México.

Ortiz, Carlos Miguel, 1999, *Urabá tras las huellas de los migrantes (1955-1990)*, Bogotá, Icfes.

Suárez, Andrés Fernando, 2007, *Identidades políticas y exterminio recíproco. Masacres y guerra en Urabá (1999-2001)*, Medellín, La Carreta.

Personería de Medellín, 2006, Unidad de Derechos Humanos, “Informe”, en medio magnético.